

ITALIA

LA FAMILIA, ENTRE REDISTRIBUCIÓN Y RECIPROCIDAD: ELEMENTOS PARA UN BALANCE SOCIAL

Bajo este título, la Fundación del Centro de Estudios de Inversiones Sociales (CENSIS), en el ámbito de un simposio titulado "Hacia un balance social del país" promovido por el Ministerio de Solidaridad Social y celebrado en Roma el 18 de abril del año en curso, presentó su ponencia sobre la actual situación socio-económica de la familia italiana. Por su interés, a continuación se reproduce la traducción íntegra de la citada ponencia.

No es fácil hablar de balance social para un sujeto como la familia, que es una realidad compleja, multiforme y en evolución continua. Cuando se afronta el tema, generalmente se trata sólo una parte del problema, la de las políticas familiares en sentido estricto, y se descuidan otras cuestiones conexas con el papel social y económico de la familia en la sociedad.

La investigación del CENSIS analiza diferentes aspectos de la realidad familiar, partiendo de su función social, para ocuparse luego de la económica y de la otra, muy importante, de cuidado y apoyo de los sujetos débiles.

Ambivalencias sociales

Desde el punto de vista del papel social de la familia, como sujeto que lleva a cabo las funciones reproductivas y las de transmisión cultural entre generaciones, se ponen de relieve al menos tres ambivalencias.

- Los datos indican una propensión a la descomposición del modelo tradicional de familia, sobre todo por la disminución de la natalidad, del número de los componentes y de los matrimonios, y por el aumento de separaciones, divorcios y formas distintas de convivencia, pero también por motivos de carácter cultural y de estilo de vida, que tienden a privilegiar los núcleos familiares de una sola persona o aquéllos sin hijos. Así pues, el modelo tradicional de familia se descompone en más modelos y la capacidad misma de la familia de regenerarse parece que se ha debilitado. A esto se debe añadir que no pocas familias se abren radicalmente, ante el creciente empeño de la mujer en la vida laboral, y esto engendra nuevos modelos de relaciones y dinámicas nuevas en la relación entre dimensión externa e interna, en el sentido de la apertura y de la pérdida de compactibilidad.

Pero hay también señales evidentes de recomposición, ya que la familia, si bien según modalidades nuevas y en evolución, sigue siendo el lugar principal de la atención a la calidad de vida y al diálogo, además de seguir siendo el lugar principal de la procreación, con una sustancial resistencia en cuanto a su fiabilidad social, en un panorama global de individualismo y huida de las responsabilidades: un sujeto intermedio fundamental también en

los procesos de intercambio democrático que, incluso en la crisis, sigue siendo titular de las relaciones, de la formación de la identidad y de la construcción de la confianza.

- En el plano de la educación y de la transmisión de los valores, muchas investigaciones demuestran que la relación generacional a menudo se banaliza, entre tendencias a la homologación de las referencias culturales y de los consumos, y las tendencias al alejamiento entre generaciones y al envilecimiento de las correspondientes relaciones, lo que conlleva el aflojamiento de la responsabilidad educativa de los adultos hacia los hijos.

Pero, a pesar de la transformación antropológica de la familia moderna (cada vez más sujeto flexible, afectuoso, atento a la calidad de vida, al diálogo y a la comprensión recíproca), el sujeto familia sigue manteniendo una sustancial fiabilidad para sus miembros más débiles, especialmente los jóvenes.

- Por último una tercera ambivalencia atañe a las modificaciones del rol de género. "El proceso de hibridación y contaminación de los papeles masculino y femenino hoy convierte a la familia en un laboratorio siempre abierto para la experimentación de nuevos modelos. Sin embargo, se percibe el peso del desequilibrio en la vida familiar", entre la fragilidad del papel masculino tradicional y refuerzo de la identidad femenina, y los que sufren esto son los jóvenes, pero también las mujeres con el peso de una responsabilidad múltiple y de un papel con más aspectos, y también los mismos hombres, puestos en crisis por la feminización de su figura en el interior de la familia y por la pérdida de identidad.

Sin embargo, es evidente que la creciente importancia de la relación interpersonal, tras haberle quitado algo, le ha conservado la importancia de una función esencial de la vida colectiva, como la de la formación de la identidad de género.

En general, las ambivalencias citadas son el síntoma de una difícil "transición en la continuidad", en la que no se detectan claras señales, ni de ayuda ni de indicación de perspectivas, por parte del contexto social e institucional.

El primer punto que hay que subrayar es la ausencia de la sociedad y de las instituciones frente al papel de la familia en sus funciones más importantes: en resumen, faltan las líneas que definen, posiblemente en términos científicos y no ideológicos, lo que es irrenunciable mientras se cambia. Pero, si se quiere afrontar un balance social, invita también a explorar con más atención el camino del apoyo a la familia como sujeto de procreación, de formación y desarrollo de la identidad, en un contexto en el que las expectativas se concentran casi exclusivamente en la solidaridad social y económica y en las modalidades con que las instituciones las sostienen, complementan o sustituyen.

Es decir que, antes que nada, un verdadero balance social debería tener en cuenta lo que se hace para sostener a la familia en cuanto tal y su misma formación, en cuanto poseedora de papeles sociales importantes para la convivencia civil y la cohesión social.

Polarizaciones económicas

La "transición en la continuidad" contribuye a hacer difícil también un enfoque de balance social tradicional, ante el cuadro de referencia en transformación, sea por lo que la familia es sea por lo que se querría que fuese. No es fácil de descifrar el panorama representado por una pluralidad de realidades familiares, más de 20 millones de unidades distintas, modernizadas y homologadas en los consumos y en la utilización del tiempo libre, y en las que la continuidad con el pasado y las certidumbres parecen derivarse casi exclusivamente de los vínculos afectivos y de responsabilidad recíproca.

Si se consideran los aspectos económicos de la condición de la familia, las funciones de redistribución de los recursos, de apoyo económico recíproco, de ahorro e inversiones, siguen siendo un elemento no variable de la vida familiar, sobre todo en Italia, elemento influido por las políticas fiscales y de redistribución y, en sentido más amplio, por las económicas y del trabajo.

Los datos indican que la renta disponible de las familias italianas, al neto de impuestos y cuotas, ha experimentado en el período 2000-2004 un incremento global del 6,1%, con un aumento en términos reales del 1,4% en 2003 y del 1,8% en 2004, correspondiente a un aumento medio del 2,4% por cada familia.

Se trata de un dato que invierte la tendencia al clima pesimista predominante en los últimos años y que se puede atribuir a algunos significativos procesos que ha cambiado en pocos años la geografía de los cauces de formación de la renta, o sea:

- el incremento del número de perceptores de renta (casi un millón más entre 2000 y 2004), estimulado por un aumento del empleo de un 4,2%;
- el incremento de las rentas de trabajo autónomo, que durante cuatro años tan sólo han subido un 10,1% por unidad de trabajo, frente a un incremento medio de las rentas de trabajo por cuenta ajena del 1,6%;
- la subida de las rentas de inmuebles, conllevada por la revaloración de los inmuebles y por el aumento de las inversiones inmobiliarias (+16% entre 2000 y 2004), que ha compensado la neta reducción de las rentas financieras, cuyo volumen se ha reducido un 25,9%;
- el incremento constante de las prestaciones sociales y de otros tipos de transferencias (+8% entre 2000 y 2004) producido sobre todo por el aumento del número de los beneficiarios.

El conjunto de estas dinámicas ha modificado la misma composición de la renta de las familias italianas, respecto a cuatro años antes: en efecto, en 2000 el trabajo por cuenta ajena era la fuente principal de renta y cubría el 40% de los ingresos medios familiares; en cambio, en 2004 la cuota ha bajado al 39,5%, mientras paralelamente ha crecido la producida por el trabajo autónomo, que ha subido del 14,6% al 16,2%.

Aunque la renta media haya aumentado, en los últimos años se ha producido un significativo proceso de divergencia social entre trabajadores autónomos y por cuenta ajena: ante un sustancial estancamiento de la renta de trabajo por cuenta ajena, que ha aumentado sólo un 1,6%, se ha registrado un incremento del 10,1% en términos reales de la renta de trabajo autónomo.

Además, en el frente del trabajo por cuenta ajena, la marcha ha sido muy diferente a nivel sectorial, con un aumento mayor de las rentas de los sectores industrial (+2,4%) y agrícola (+2,9%) donde, en el mismo período, se ha registrado también una neta reducción de los niveles de empleo.

Es distinto el caso de la Administración Pública, donde, frente a una disminución de los niveles ocupacionales de un 4,1%, la renta disponible por empleado ha aumentado un 6,3%.

Cabe tener en cuenta también que en los últimos años han aumentado el sector sumergido y la evasión fiscal, con problemas para las rentas de trabajo por cuenta ajena sobre todo cuando no se tienen complementos de rentas procedentes del sumergido o de la evasión, y especialmente ante un núcleo familiar numeroso, carencia de un segunda renta, de patrimonio o de factores de protección.

En este contexto, es bastante lógico deducir que la patrimonialización constituye un recurso decisivo en la determinación del nivel de bienestar real de muchas familias y un estrategia de autoprotección y aseguración. Actualmente, el 82% de las familias es propietario de la vivienda, un 13% posee una segunda casa y un 4,5% otras tipologías de inmuebles; ha crecido progresivamente el peso de las actividades reales (inmuebles, actividades productivas y objetos de valor, según la clasificación de la Banca de Italia) sobre el total de la riqueza: en 1998 la riqueza real representaba el 73,8% de la riqueza global de las familias, en 2003 esta cuota ha subido al 80%.

Por otra parte, la "patrimonialización" es un fenómeno que induce el aumento de la diferenciación social: de hecho, en los diez últimos años, el porcentaje de patrimonio total poseído por el 5% de las familias más ricas de Italia ha pasado del 27% al 32% de la riqueza total. En efecto, la creación de nuevas rentas y la consolidación de los patrimonios familiares no concierne a todos en igual medida y existen fuertes diferencias entre la gran masa de los "pequeños ahorradores" y la franja más restringida con grande disponibilidad de gasto e inversiones.

Aparece crítica la situación de las familias despatrimonializadas, que ni disponen de medios suficientes para adquirir una vivienda. Si se considera, en particular, que la crisis de los alquileres en Italia se ha convertido en un fenómeno crónico y que, desde hace años, se asiste a una reducción progresiva del número de vivienda en oferta y a un incremento de los precios que no tiene equivalentes en los demás países europeos, el resultado es un ulterior aumento de la disparidad entre familias con casa propia y en alquiler.

Pero incluso en este marco de diferenciación de los recursos económicos, los estudios siguen confirmando el mantenimiento de la función económica de la familia en términos de redistribución y ayuda, sobre todo hacia los miembros más débiles y los jóvenes. Las etapas evolutivas de transformación de las funciones económicas de las familias italianas en las últimas décadas, tal y como emergen de los estudios del CENSIS, sobre todo por cuanto concierne a la protección y sustentamiento de los menores, quedan resumidas en la tabla siguiente:

Período	Definición	Características principales	Indicadores económicos
Años 70	La Familia Combinatoria	<ul style="list-style-type: none"> - Multiplicación de las actividades laborales - Aumento de la renta como suma de varias rentas de trabajo - Incremento de la propensión al ahorro 	<ul style="list-style-type: none"> - El 41% de las familias tiene 2 perceptores de renta, el 18,3% 3 o más - El 6% de los cabezas de familia está pluriempleado - La propensión media al ahorro pasa del 9,8% de 1976 al 14,4% de 1980
Años 80	La Familia S. A.	<ul style="list-style-type: none"> - Crecimiento del patrimonio - Gestión activa del ahorro: boom de los Títulos del Estado - Crecimiento de las rentas patrimoniales 	<ul style="list-style-type: none"> - La riqueza media neta de la familia en términos reales crece un 37,3% - El porcentaje de los títulos del Estado sobre el total de las actividades financieras de las familias pasa del 6,4% de 1980 al 20,5% de 1990 - El porcentaje de la renta de capital sobre la renta total pasa del 12,3% de 1980 al 18,9% en 1990.
Años 90	La Familia Competitiva	<ul style="list-style-type: none"> - Mayor aumento de l patrimonio - Gestión más agresiva del ahorro: boom de la Bolsa - Inversiones privadas en Welfare (sanidad, asistencia, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - El porcentaje de acciones y Fondos sobre el total de las actividades financieras de las familias para del 5,7% de 1990 al 21,7% en 2000 - La incidencia de la riqueza neta sobre la renta pasa del 4,3% de 1990 al 6,3% en el año 2000 - El gasto sanitario privado se estima alrededor de los 28.000 millones de euros
Años 2000	La Familia Tutor	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión cauta de las inversiones, protección del patrimonio - Imposición de la "cultura del seguro" - Boom del sector inmobiliario 	<ul style="list-style-type: none"> - El porcentaje de acciones y participaciones sobre el total de las actividades financieras de las familias bajan en el trienio 1999-2002, del 19,3% al 12,8%. - El porcentaje de las pólizas sobre la vida y fondos de pensiones sobre el total de las actividades financieras de la familia sube, en el trienio 1999-2002, del 12,5% al 16,2% - La venta de viviendas crece un 16,7% y los precios un 18,2% en el periodo 2000-2002

En el período más reciente, se detecta una centralización importante en el ejercicio las funciones económicas, sobre todo en la elección del destino de los ahorros disponibles entre las distintas oportunidades. La familia se convierte en Familia Tutor, que encauza a los hijos mediante procesos de responsabilización y la utilización de una pluralidad de instrumentos, como pueden ser, por ejemplo, las iniciativas de autoempleo.

A tal respecto, en los últimos meses el CENSIS ha subrayado el peso creciente en éste ámbito de un fenómeno espontáneo como el del low cost, que no es sólo una estrategia empresarial de contención de los costes de producción, o una vía de acceso al consumo, sino que asume una fuerte valencia social inclusiva porque amplía la platea de consumidores y, al mismo tiempo, produce efectos de "política de la renta", porque sostiene el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Desde el sector de los viajes, el nuevo modelo de oferta se ha extendido rápidamente a muchos otros sectores (hard discount, outlet, tiendas a 50 céntimos, telefonía a través de internet, fármacos genéricos, etc.) Se trata de un auténtico nuevo modelo social y de una respuesta a los problemas de renta de la sociedad patrimonializada, donde coexisten buenos patrimonios y bajas rentas, y que de hecho sustituye, o por lo menos acompaña, políticas públicas de inclusión y redistribución, atenuando por ejemplo, de manera importante, los efectos socioeconómicos de la inflación posterior a la introducción del euro.

Desde luego, las estrategias de patrimonialización y de low cost no son suficientes para contrarrestar las dificultades económicas en las que se encuentran algunas tipologías de familias, que, bajo la denominación corriente pero algo inapropiada de "nuevos pobres" representan el área de la pobreza relativa de las clases medias, por su renta insuficiente o por su precariedad. Se trata, en realidad, de pobrezas relativas, determinadas por la diferencia con las condiciones de vida media de los demás sujetos de la misma clase social y del mismo país, que no conllevan ni una verdadera pobreza económica, ni degradación psicológica y social, como tampoco la exclusión o marginación que caracterizan otras formas más graves de pobreza. Pero sí son índice de una falta de equidad en el sistema institucional de oferta social y del estado de bienestar, y atañen sobre todo a dos categorías:

- las familias con una sola renta, derivada del trabajo, sin patrimonio y sin otros ingresos de tipo autónomo o sumergido;
- los trabajadores precarios, sobre todo mujeres, jóvenes e inmigrantes, con carreras profesionales interrumpidas, breves o muy penalizadas por falta de una protección social adecuada, sobre todo si se trata de personas solas.

Dificultad y pobreza

Hablando de dificultad y pobreza, hay que admitir que el tema se presta a fáciles instrumentalizaciones y simplificaciones. A menudo se piensa que el aumento de la pobreza y la aparición de nuevas pobrezas sean fenómenos recientes, y sobre todo se tiende a confundir las nuevas pobrezas con formas de dificultad y desigualdad como las citadas en el capítulo anterior. En realidad, ya después de la fase de reconstrucción posbélica, en Italia empezó un largo recorrido de "condensación social", de estancamiento de la movilidad y de empobrecimiento de las relaciones interpersonales, primera verdadera "nueva pobreza" de la Italia moderna, cuyo carácter es sobre todo inmaterial.

La segunda "nueva pobreza" es la determinada por la fragilidad social, que depende de la escasez de recursos, pero sobre todo de la carente integración social y la escasa posibilidad de luchar contra ello. Y así como los recursos han sido siempre escasos en nuestro país, la integración social se ha debilitado con el empobrecimiento de los valores y de la movilidad desde los años 80 en adelante, y la capacidad de lucha se ha visto en crisis en la última década, con el debilitamiento de la confianza en el desarrollo.

Además de estas dos formas de "pobreza postmaterialista", a un nivel más material la sociedad contemporánea tiene que hacer frente a dos áreas principales de nueva pobreza, especialmente pesadas para la dignidad de las personas: la pobreza de la exclusión social de los marginados y la de la enfermedad y la soledad. Sería preciso concentrar la atención sobre ellas.

La pobreza de la exclusión social es la única forma de dificultad a la que se conviene el nombre de pobreza en el sentido tradicional de la palabra. Se refiere a parados de larga duración, refugiados en busca de una patria, inadaptados, vagabundos, inmigrantes económicos irregulares, en resumen "víctimas colaterales del progreso", excluidos de la integración laboral y social.

En cambio, la pobreza por enfermedad y soledad se produce también en ausencia de desempleo o de falta de integración social, cuando una enfermedad grave, crónica o mortal perturba la vida de la persona y de su familia y, sobre todo, cuando a esto se suman la soledad y la carencia de cuidados idóneos. A menudo tampoco se cura con la riqueza económica y, por consiguiente, afecta también a los ricos.

De los análisis resulta que todas las pobrezas mencionadas, pero especialmente las dos últimas, se agudizan en las situaciones donde faltan factores de protección social, como el patrimonio o la vivienda de propiedad.

En general el balance es totalmente negativo, y las situaciones de mayor dificultad se producen cuando se suman más factores de empobrecimiento: por ejemplo, enfermedad junto con precariedad, renta insuficiente junto con una familia numerosa, etc..

Merece mayor atención el tema de la enfermedad y la soledad de los mayores merecen capítulo aparte, en un momento en el que la atención a los mayores oscila esquizofrénicamente entre la exaltación del rejuvenecimiento de la edad madura y la preocupación por las fragilidades y necesidades asistenciales de los mayores solos y enfermos. En efecto, la realidad social presenta un cuadro controvertido, entre mayores que consumen, viajan, invierten, se ocupan de los nietos, y mayores abandonados, no autosuficientes, solos en el calor de verano de las grandes ciudades, en cola en las oficinas de correos o incluso en los comedores para los pobres.

La situación más crítica es la de los mayores solos y enfermos. Aumenta el número de las personas con más de 65 años que viven solas en Italia; y, por otra parte, sólo el 25% de los entrevistados considera positiva la solución del "edificio protegido", mientras todos los demás prefieren quedarse en su vivienda. Pero la vivienda de los mayores es a menudo no segura, o demasiado grande, o mal servida en lo que se refiere a las compras, la sanidad, el banco, los transportes. Sus habitantes carecen de recursos y, a menudo, de informaciones y conocimientos para reestructurarla con el fin de que sea más segura. No hay que asombrarse si los mayores tienen más miedo a la enfermedad (76%), a la muerte del cónyuge (67%) y a la soledad (42%).

Si la soledad de los mayores es una de las plagas de nuestro tiempo, tampoco hay que olvidar las patologías crónicas. De estudios recientes se desprende que, frente a las principales tipologías de dificultad, la drogadicción es la que más preocupa a los italianos (58,6% de los entrevistados); siguen el Sida (41,1%), el desempleo de larga duración (26,3%), la marginación de los menores (20,3%), la prostitución (17,8%) y la pobreza económica (15,2%).

De las estimaciones basadas sobre muestras representativas de enfermos crónicos y de sus familias, se desprende que el peso de la asistencia a estas patologías es fuerte y cae sobre los familiares de los enfermos. En Italia en los últimos decenios el 70-80% de la asistencia prestadas a los minusválidos y dependientes está a cargo de las familias a que pertenecen, mientras sólo una mínima parte, inferior al 5%, de estas categorías de enfermos es asistida en institutos ad hoc; otra cuota minoritaria, la remanente, está representada por enfermos asistidos en casa con la ayuda de operadores externos.

Según una investigación del CENSIS, el 2,4% de los mayores de 65 años viven solo con una "cuidadora", procedente en su mayoría de África, Suramérica y Europa del Este. Esto demuestra claramente la existencia de una necesidad de servicios no suficientemente proporcionados por las estructuras públicas, y una demanda de asistencia a domicilio que emerge no sólo en los ambientes acomodados y ciudadanos, sino también en los de la media burguesía urbana y rural. Este fenómeno

relacionado con el cuidado de los mayores, discapacitados y niños, no puede sino preocupar, en cuanto síntoma de una dificultad real de las familias, y en varios casos de un abandono por parte de los hijos cuando los padres envejecen, pero sobre todo de una carencia de redes de apoyo de los padres mayores por parte de los hijos, pero sobre todo de la carencia de redes de apoyo, y de la creación de otra área débil, la que alguien imputa al paradigma postfeminista de la "liberación" de las mujeres italianas en perjuicio de la libertad de vida de las empleadas del hogar, que renuncian a su propia vida familiar y a sus hijos para permitir que su empleador trabaje y, al mismo tiempo, tenga una familia.

Protección pública débil y subsidiaridad fuerte

Ante los fenómenos mencionados, ¿cuál es el papel del sistema de protección social en Italia? Todos los análisis coinciden en subrayar una situación de infravaloración de las exigencias de la familia, sea a nivel local sea nacional, también por su papel de tutela de los sujetos débiles, y esto a pesar de que la atención ha aumentado en los años recientes, especialmente en cuanto a la responsabilidad ante la infancia. Así pues, antes que nada hay un problema de carácter estratégico de revisión de los modelos de protección sobre los aspectos siguientes:

- una concepción sobre todo reparadora, que privilegia la compensación de las lagunas más graves, respecto a la valorización de los recursos existentes;
- un modelo de bienestar que sigue siendo principalmente asistencial;
- un planteamiento aún centralista, si bien en presencia de "localismo de lo social", con muchas y significativas diferencias de enfoque entre áreas distintas, pero sin una real cultura de autonomía funcional de los territorios respecto a sus poblaciones;
- una contradictoria tendencia a dejar crecer un mercado social autogestionado, sin que se hayan establecido las reglas generales de la relación entre lo estatal, lo social y el mercado, y sin pensar en formas de soporte a la auto tutela y al ámbito informal;
- un planteamiento laborista, que prevé muchas formas de soporte para los trabajadores y los jubilados y pocas o ninguna para todos los demás.

Las familias deberían convertirse en uno de los principales beneficiarios de una nueva definición de los criterios y de las prioridades de la protección social y especialmente de la superación de la lógica que privilegia a los sujetos con una relación contributiva con el mercado del trabajo.

Este desequilibrio está demostrado por la repartición del gasto público para las prestaciones sociales. En Italia el gasto para la protección de las personas mayores es significativamente superior al de los demás países europeos: un 62% del gasto social global, ante una media europea del 43%. Pero gran parte de este gasto se destina a la previsión, mientras son débiles los capítulos funcionales: "desempleo", "familia", "vivienda". Además, el envejecimiento progresivo de la población tiende a

incrementar el componente del gasto para pensiones, acentuando el desequilibrio existente en el gasto global para la protección social.

El gasto para la protección social corresponde globalmente al 25,1% del Producto Interior Bruto, y está muy desequilibrado a favor de las prestaciones de los capítulos "vejez" y "supervivientes" (el 14,4% del PIB, ante el 10,6% de la media europea). En cambio, el gasto para la tutela de los parados, de la familia, para la vivienda resulta en un 5,6% del gasto global, ante una media europea del 17,8%. Más en detalle, los tratamientos previstos para la familia ascienden al 1% del PIB (ante una media del 2,6%) y aquellos para el desempleo al 0,4% (ante un 0,6%), con perjuicio para los tramos más jóvenes de la población y para las familias.

Además, según las elaboraciones del "Centro Europa de Investigaciones" (CER), las prestaciones monetarias públicas y aquéllas en servicios causan injusticias de redistribución no irrelevantes entre las varias tipologías de familias beneficiarias, que resultan evidentes en los tramos de renta más bajos. La acción de redistribución vertical es más marcada en el caso de las familias con miembros mayores, y los beneficios proporcionados superan los destinados a las familias "jóvenes" o "maduras" (en la edad intermedia).

En cuanto a la previsión social, a comienzos de los años 90 el desequilibrio demográfico creciente y los cambios producidos en el mundo del trabajo han sacado a relucir las contradicciones del sistema, desvelando los muchos problemas irresueltos: la excesiva generosidad (la tasa de sustitución, las adecuaciones, las pensiones de antigüedad, las "pensiones baby"); su injusticia generacional entre categorías diversas (por alícuota contributiva, por proporción cuotas/pensiones, por importes); la injusticia generacional (por el desequilibrio entre el gasto para pensiones y los demás gastos sociales para la familia, para la infancia); el déficit crónico y creciente entre gasto para pensiones y riqueza producida, con cobertura del déficit a través de la hacienda pública.

La reforma Dini ha resuelto algunos de estos problemas, pero acentuando uno, el de la injusticia entre generaciones, introduciendo el régimen contributivo sólo para los contratados después de 31.12.1995 y el pro-rata para los que en dicha fecha tenían más de 18 años de cuotas pagadas, y dejando en vigor el régimen retributivo para los demás, esto es para los trabajadores más antiguos y estables.

Así pues, el saneamiento se ha hecho a expensas de las nuevas generaciones y, por consiguiente, de las nuevas familias y de aquéllas con niños, según se desprende de un reciente estudio sobre la riqueza pensionista por tramos de edad: según este análisis, la reforma Amato ha empobrecido sobre todo los tramos de edad entre 25 y 39 años, la reforma Dini las que van de los 20 a los 39 años, y la primera propuesta Berlusconi, que se discutió en aquel entonces, a los tramos de edad entre 35 y 59 años.

Es evidente que todo esto, junto con las diferencias entre los distintos territorios y tramos sociales en la participación laboral y en la cotización para pensiones, agudiza una situación de fractura entre insider y outsider, donde entre los primeros figuran sobre todo los trabajadores hombres adultos con las profesiones más fuertes, y entre los otros los jóvenes, las mujeres y las familias más débiles.

Hay que admitir que, a partir de 2000 en el sector socio/asistencial se han producido profundos cambios normativos, institucionales y organizativos, delineando un nuevo cuadro de las responsabilidades y tareas institucionales y organizativos.

En el campo legislativo, se ha producido un viraje con la aprobación de la ley 328/2000 ("Ley marco para la realización del sistema integrado de intervenciones y servicios sociales"), verdadera innovación del sector, si bien el cuadro normativo configurado por esta ley ha experimentado profundos cambios el otoño después de su aprobación. La evolución contradictoria de la estructura de oferta no ha producido hasta hoy niveles de respuesta adecuados a las exigencias de la demanda social de tutela y asistencia, habida cuenta de las necesidades de las familias, con considerables e históricas excepciones en los territorios tradicionalmente caracterizados por redes de apoyo social y de colaboración entre público y privado.

Según los datos del Informe 2004 del Instituto Nacional de Estadística (ISTAT), se ha dirigido al sector público sólo un 4,4% de todas las familias que han recibido alguna ayuda, y este dato se reduce en 2,4 puntos porcentuales si se consideran las familias que se han dirigido exclusivamente al Estado. Otro 7,8% se ha dirigido a los servicios privados pagando, y un 16,8% a la red informal. Así pues, una vez más para las familias italianas se confirma la importancia de la auto ayuda y de las redes informales (familiares, parientes, amigos y de responsabilidad difundida), que sustituyen al sistema público de oferta, sin que entre ellas haya interacciones adecuadas.

Cabe señalar que se ha dirigido a la red informal el 34,2% de las familias con al menos una personas con graves problemas de autonomía, el 33,3% de las familias con madre empleada y con al menos un niño menor de 14 años y el 31,4% de las familias con al menos una persona con más de 80 años.

**Tipologías de familias que han obtenido mayor ayuda,
por procedencia de la ayuda (Año 2003)**

(val. por cada 100 familias con las mismas características)

Tipologías familiares	Informal	Privada	Pública	Total familias ayudadas
Con al menos una persona con graves problemas de autonomía	34,2	20,3	21,7	51,8
Con al menos un hijo menor de 14 años y madre trabajadora	33,3	13,9	2,2	42,8
Con al menos una persona mayor de 80 años	31,4	18,4	13,4	45,7
Familias monoparentales con al menos un hijo menor de 14 años	30,0	11,6	6,7	40,4
Total de las familias que reciben al menos una ayuda	16,8	7,8	4,4	24,3
Fuente: elaboración del CENSIS sobre datos del ISTAT, 2004.				

También las políticas laborales resultan poco sensibles a los problemas familiares, y hay escasa sensibilidad para un modelo de sistema familia/trabajo, que sostenga la armonización de los tiempos y de las responsabilidades.

Según los datos sobre población activa, en 2004 más del 45% de las mujeres entre 15 y 64 años ha tenido que reducir su horario de trabajo para cuidar a sus hijos u otros familiares, y este porcentaje sube al 60% para las mujeres entre 35 y 44 años; además, muchas mujeres que trabajan a tiempo parcial, lo harían a tiempo pleno de poder utilizar servicios públicos adecuados (sea como costes, horarios, cercanía a la zonas de residencia y personal cualificado).

La dificultad de armonizar tiempos de vida y de trabajo incluye también en la búsqueda de un empleo: un 23% de las mujeres no ocupadas entre 15 y 64 años, y el 34,1% de las con menos de 34 años, afirma que no trabaja porque tiene que cuidar los hijos o los familiares no autónomos, pero que lo buscaría de poder disfrutar de servicios de apoyo a la familia.

Italia, según datos de "Axa Retirement 2005", resulta ser, con España, el país con el mayor porcentaje de trabajadores (y el segundo por número de jubilados) que declaran confiar en su familia en caso de enfermedad. En efecto, el 85% de los trabajadores y el 82% de los jubilados piensan esto, ante el 84% de los trabajadores alemanes y portugueses, el 78% de los canadienses, el 77% de los australianos, y el 47% de los trabajadores de Singapur.

Además, el 96% de los trabajadores italianos y el 98% de los jubilados creen que es deber de los hijos ayudar a sus padres jubilados con su presencia y atención constante (sólo Hong Kong y Portugal alcanzan porcentajes superiores), mientras el 67% de los trabajadores y el 65% de los jubilados cree que los hijos deben ayudar económicamente a la familia de origen.

La familia es igual de fundamental en la protección de los niños cuando no frecuentan la escuela: según los datos del ISTAT, al menos algunas veces por semana el 52% de los niños hasta los 13 años es confiado a adultos, especialmente a los abuelos (40% de los niños, y este valor supera el 46% para los niños entre 0 y 5 años).

Utilizan más la ayuda de los abuelos las parejas que están empleadas (50,5%) y los genitores solos (un 50% de éstos últimos).

Consideraciones finales

Resulta claro que la situación descrita necesita un cambio de las políticas para la familia, no sólo bajo la óptica de los equilibrios sociales entre viejas categorías muy garantizadas y nuevas categorías poco o nada garantizadas, sino también ante un nuevo paradigma de bienestar promocional.

Hay que resolver sobre todo tres cuestiones:

- el paso de un sistema de bienestar monolítico a un sistema a 3 y, posiblemente, 4 pilares, donde a la asistencia obligatoria básica se acompañan el pilar mutualista y de categoría, el del seguro e individual y el de la contribución activa de los ciudadanos a la solidaridad;
- la revisión de los pesos internos del sistema de bienestar, especialmente la ampliación de las líneas de intervención dirigidas a los jóvenes, a las mujeres y a todos los nuevos sujetos sociales en términos de formación, orientación y recalificación profesional, bienestar local, asistencia a la procreación y educación de los hijos, ayuda a la no autosuficiencia, políticas de la vivienda, etc.;
- la búsqueda de soluciones internas al mercado del trabajo, que permitan proceder en el camino de la difusión de la flexibilidad sin crear ulteriores formas de precariedad laboral y contributiva.

Aparte de la miopía estratégica que conlleva un descuido crónico de los problemas antes aludidos, las cuestiones planteadas están conexas con el tema de la disponibilidad de recursos para las políticas sociales y de desarrollo, tema que por su parte está vinculado con el de la riqueza producida y de su asignación.

Hay que centrar la atención especialmente sobre dos aspectos: el primero es el de la "solidaridad redistribuidora" del fisco ante las cargas familiares (ayudas familiares y políticas para la vivienda).

El segundo aspecto atañe a la solidaridad del bienestar local, que debería desarrollarse más, actuando sobre los requisitos que el territorio posee (continuidad asistencial, asistencia a domicilio, responsabilidad social de las empresas, subsidiariedad del voluntariado, papel de los servicios para el empleo, papel de la escuela y de la universidad, ayuda recíproca).

Se necesitan también intervenciones masivas a nivel nacional para mejorar las condiciones de las categorías más desaventajadas (refugiados, parados de larga duración, marginados, vagabundos, inmigrantes irregulares, etc.)

Para la pobreza de enfermedad y soledad se precisa reforzar la política nacional y local de ayuda a la no autosuficiencia, asistencia a domicilio, residencias para mayores solos, formación de cuidadoras y asistentes domiciliarios, redes sociales y asistenciales de las enfermedades, de tiempo libre y cultura.